



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ  
D.C.

---

Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

**RADICACIÓN:**                   **11001-33-35-026-2020-00312-00**  
**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL  
DERECHO  
**DEMANDANTE:**           **NYDIA BUITRAGO GÓMEZ**  
**DEMANDADO:**           UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -  
UNP

Dentro del presente asunto, la doctora **NYDIA BUITRAGO GÓMEZ**, a través de apoderado judicial presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con la finalidad de obtener la nulidad de los oficios No. **OFI20-0013646 del 10 de junio de 2020 y OFI20-00016010 del 2 de julio de 2020**, por medio de los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales y prestacionales con ocasión al vínculo que tenía con la entidad hasta el 31 de diciembre de 2018, por medio de contratos de prestación de servicios.

Ahora bien, este despacho observa que no es posible admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

Como primera medida, se debe recordar que, a través del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

De la misma manera, y a través del decreto 417 de 2020, el Gobierno nacional adoptó varias medidas encaminadas a garantizar los derechos de los usuarios de la justicia, la continuidad de los servicios de justicia prestados por entidades del ejecutivo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos.

Que, en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional a través del decreto 806 del 4 de junio de 2020, adoptó las medidas necesarias para la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las

actuaciones judiciales, agilizando de esa manera, el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria. Ello, con el fin de garantizar que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales, el ejercicio de los derechos y de la misma manera, se evite la aglomeración de personas en los despachos y centros de servicio judiciales, una vez fuera levantada la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Aunado de lo anterior, el Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

*“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*

1. *La designación de las partes y sus representantes.*
2. ***Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad.*** *Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.*
3. *Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
4. ***Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.***
5. *La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
6. ***La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.***
7. *El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

#### **Negrilla del Despacho**

Por lo tanto, y dando aplicación a lo establecido por la ley 1437 de 2011 y el decreto 806 de 2020, este despacho judicial **INADMITIRÁ LA DEMANDA**, por las siguientes razones:

#### **1. Del razonamiento adecuado de la cuantía.**

El artículo 155 de la ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2º específicamente a los de carácter laboral.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Norma recientemente modificada por la Ley 2080 de 2021.

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que, para la fecha de presentación de la demanda<sup>2</sup>, el salario mínimo legal mensual vigente aprobado por el Gobierno Nacional es de \$ 877.803, luego entonces, al realizar la operación matemática, tenemos que los 50 S.M.L.M.V. determinados en la norma precitada, equivalen a la suma de **\$ 43.890.150.**

En relación con la estimación razonada de la cuantía, la parte actora la estima de manera general en **\$105.821.428**, desbordándose de esta manera la competencia de este Despacho Judicial para conocer del presente asunto.

De conformidad con lo anterior, se observa que la misma no se realizó de acuerdo con los lineamientos trazados por la ley, sin determinar dicho presupuesto procesal razonadamente, pues recuérdese que la cuantía debe calcularse desde cuando se causaron los derechos y hasta la presentación de la demanda **sin que supere los tres años**, y sin tomar en cuenta **los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios**, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

## **2. Acreditación envío copia de la demanda y sus anexos.**

En el artículo 6°, inciso 3° del decreto 806 de 2020, señala:

(...)

*“En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos”*

Sombreado y subraya fuera de texto

Este Despacho exhorta al profesional del derecho, para en que, en lo sucesivo, aplique lo dispuesto en el Decreto 806 del 2020, y junto con los demás requisitos formales de que trata el artículo 162 del C.P.A.C.A., allegue con la presentación del escrito de las nuevas demandas, memorial en el que conste el envío de la demanda, junto con sus anexos, a la entidad demandada. Ello en aras de garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, y así mismo, como cumplimiento a sus deberes como sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones.

---

<sup>2</sup> 23 de octubre de 2020

### 3. De las normas violadas y concepto de violación

Se deben señalar las normas que se estiman violadas con la expedición del acto acusado, explicando para el efecto, el concepto de violación sobre cada una de las mismas, y la forma en la cual se considera que el acto administrativo las ha vulnerado, ello para cumplir el numeral 4° del artículo 162 del C.P.A.C.A.

Lo anterior, por cuanto el Profesional del Derecho si bien indica cuales son las normas violadas por los actos administrativos enjuiciados, no explica cada una de ellas; por lo que deberá exponer el concepto de violación de cada una de ellas. Aclarando y explicando también, las normas que cita como violadas del Código Contencioso Administrativo.

### 4. Del agotamiento de la reclamación administrativa.

El profesional de derecho, en las pretensiones de la demanda solicita el reintegro al cargo y el pago de emolumentos; sin embargo, una vez revisado el plenario, éste Estrado Judicial echa de menos la petición radicada ante la entidad, solicitando en sede administrativa el respectivo reintegro al cargo junto con el pago de emolumentos dejados de percibir, con el objeto de provocar un pronunciamiento de la Administración para que ésta, mediante el respectivo acto administrativo, fijara su posición en relación con el derecho cuyo otorgamiento se le demandan.

Esta actuación, que se enmarca dentro los pronunciamientos realizados por el H. Consejo de Estado<sup>3</sup>, manifestando lo siguiente:

*“Como bien lo ha informado la doctrina y la jurisprudencia, la vía gubernativa constituye dentro de nuestro ordenamiento jurídico, requisito indispensable para poder demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto y el respectivo restablecimiento del derecho en sus diversas modalidades bajo la acción de nulidad subjetiva consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; **lo anterior por cuanto por regla general la Administración Pública, a diferencia de los particulares, no puede ser llevada a juicio contencioso si previamente no se le ha solicitado por parte del administrado una decisión sobre la pretensión que se desean ventilar ante el Juez**<sup>4</sup>.*

*Dentro de nuestro ordenamiento jurídico el presupuesto de acceso a la vía judicial, también denominado doctrinariamente “decisión preable” o decisión previa, **surge a partir del momento en que el gobernado acude por escrito a elevar una pretensión de carácter subjetivo poniendo en marcha el aparato administrativo en procura de una respuesta,***

---

<sup>3</sup> Consejo de Estado – Sección Segunda – Magistrado Ponente: Gustavo Gómez Aranguren – Expediente 08001-23-31-000-2011-00335-01 del 22 de marzo de 2015.

<sup>4</sup> Betancur Jaramillo Carlos. Derecho procesal Administrativo. Quinta Edición. Pág. 170.

**materializada en un acto administrativo que en muchas ocasiones basta para acceder a la vía judicial por disposición expresa del artículo 135 del C.C.A.**

*En ese orden de ideas, la vía gubernativa se torna en el instrumento de comunicación e interacción entre la Administración Pública y sus Gobernados cuando media un conflicto de intereses, erigiéndose, no solo como una forzosa antesala que debe transitar quien pretende resolver judicialmente un asunto de carácter particular y concreto, sino en un mecanismo de control previo al actuar de la Administración cuyo beneficio es de doble vía, pues constituye tanto la posibilidad de obtener en vía administrativa la satisfacción de una pretensión subjetiva como la oportunidad de ejercer un control de legalidad sobre las decisiones administrativas, a fin de que se tenga la oportunidad de revisar los puntos de hecho y de derecho frente a un asunto que posteriormente se ventilará dentro de un proceso judicial.*

**Por tanto, se entiende que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley sino el fiel contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilarán en sede judicial.”**

*Negrilla y subraya fuera de texto*

En virtud de ello, se deberá allegar la prueba que demuestre que se elevó petición ante la administración solicitando la pretensión del reintegro al cargo, y con la cual se logre establecer que en efecto agotó el requisito de procedibilidad ante la entidad demandada, de conformidad con lo normado en el artículo 161, numeral 2 del C.P.A.C.A.

Así las cosas, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de las normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

### **RESUELVE**

**PRIMERO. - INADMITIR LA DEMANDA** instaurada por **NYDIA BUITRAGO GÓMEZ**, contra de la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO. -** Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

**TERCERO.** - Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá acreditar el envío de la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído, a la entidad demandada a través de correo electrónico de notificaciones judiciales.

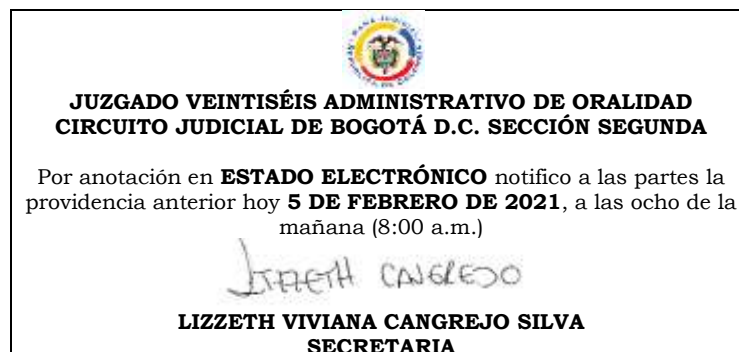
Sin embargo, de no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**

Juez

*20*



Firmado Por:

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO**

**JUEZ CIRCUITO**

**JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7580d26bdb0fcda84d7b70e2a7cbf44f1378d703d5a1f14473dc5879f4c02701**

Documento generado en 04/02/2021 01:06:05 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**